

Loxicha, entre la violencia cotidiana y la resistencia pacífica

Iván Rincón Esprú

Los Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca, una región asolada por la violencia desde siempre, es también una más de las que sufren actualmente una creciente presencia militar y paramilitar en gran parte del país. A la violencia que para las comunidades xi-ches han sido los recientes desastres naturales y la marginación ancestral, se suma la ejercida por el ejército federal y la policía, junto con los caciques locales y sus bandas armadas.

El surgimiento del Ejército Popular Revolucionario en agosto de 1996, al atacar el poblado de La Crucecita, Huatulco, sirvió como pretexto para iniciar una cacería de presuntos militantes del grupo armado y propiciar el regreso de los caciques locales al poder municipal, desde donde controlan ahora tanto la inversión pública en la región como la explotación de los recursos naturales. Con el encarcelamiento del cabildo municipal y el comité de padres de familia, los agentes rurales y las autoridades de las rancharías, además de varios maestros y algunos simples campesinos

y comerciantes, los grupos de poder que habían sido desplazados a finales de los años setenta por la asamblea comunitaria dieron un golpe de estado a escala.

La brutal persecución desatada en septiembre de 1996 con detenciones arbitrarias, asesinatos por tortura y desapariciones forzadas, ocasionó el desplazamiento de familias y comunidades enteras, el saqueo de las casas abandonadas y la pérdida de las cosechas. Después de la represión masiva y la sustitución del ayuntamiento legítimo por un consejo de administración espurio, comenzó una campaña de delación que ha creado el clima de terror imperante hasta la fecha. En los puestos de control policiaco y militar, y las incursiones represivas en las comunidades, los llamados “entregadores” se cu-

bren el rostro con paliacate o pasamontañas para señalar a paisanos suyos que son entonces detenidos, asesinados o desaparecidos. En las detenciones, torturas y ejecuciones sumarias, además de la policía y el ejército federal, participan los pistoleros al servicio de los caciques locales.

En octubre de 1998, una asamblea manipulada con chantajes y bajo amenaza “eligió” como presidente municipal de San Agustín Loxicha a Lucio Esteban Vázquez Ramírez, un “entregador” que primero fue miembro de la policía preventiva, después agente de la policía judicial del estado y ahora diri-



Rotmi Enciso



ge las agresiones a las comunidades xiches. Según los familiares de los detenidos, asesinados o desaparecidos en esta guerra silenciosa, Lucio Vázquez participó en la mayoría de las detenciones, así como en la tortura y el asesinato de por lo menos diez personas.

De 136 presos políticos, 49 han logrado su libertad absoluta y 87 permanecen en prisión, 76 en tres cárceles del estado de Oaxaca (contando al que murió en febrero pasado por falta de atención médica) y 11 en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México. Se habla de unos 40 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas.

La resistencia pacífica de los loxichas a la represión que, ahora de manera selectiva, tiene lugar cotidianamente en la región, durante más de tres años ha sido encabezada por las mujeres, pues los hombres per-

manecen escondidos en el monte, van de una comunidad a otra o de paraje en paraje, cuando no están desterrados en alguna ciudad, huyendo tanto por las amenazas de los caciques locales y sus bandas como por la vigencia de unas 250 órdenes de aprehensión. Se calcula que actualmente hay más de 500 desplazados.

Las esposas, madres y hermanas de los presos políticos, asesinados y desaparecidos, son ahora el sostén de sus familias. Desde el 10 de junio de 1997, día que instalaron un plantón frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, además de mantenerlo en pie hasta la fecha, trabajan para suplir los ingresos del padre o el marido ausente, visitan al pariente detenido, buscan al desaparecido y acuden a diversos foros, tanto nacionales como internacionales, para denunciar la dramática situación que padecen y solicitar apoyo. En su "campamento de denuncia" se relevan cada 15 días para asegurar la presencia permanente de unas 30 de ellas y medio centenar de sus hijos, y demandan la inmediata libertad de sus familiares presos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, indemnización a las esposas de los asesinados y castigo

a los asesinos, presentación con vida de los desaparecidos, becas para los hijos menores de las viudas y los presos, la destitución del "presidente municipal impuesto" y que salgan la policía y el ejército federal de las comunidades.

Los hijos de estas mujeres suman más de 300 y casi 250 son menores de edad que se han quedado sin escuela, pues mientras unos 30 reciben estudios en la capital del estado, el resto sigue sin clases. Más de 50, en su mayoría niños, quedaron huérfanos y en el desamparo.

Antes de instalar el plantón, mientras permanecían en la ciudad de Oaxaca para visitar a sus familiares presos, las mujeres y niños loxichas dormían en la central camionera o donde les cayera la noche. Algunas viajaron a la capital del país, a donde habían sido trasladados sus parientes, y permanecieron ahí durante varios meses, hasta que los presos fueron llevados de regreso a Oaxaca, y más tarde trasladaron a otros hasta el penal de Almoloya de Juárez, lo cual hace prácticamente imposible el contacto familiar.

En ausencia de sus padres o esposos, de quienes dependían económicamente, ahora estas mujeres mantienen a sus hijos, cargan con los más pequeños, encargan a los más grandes, dejan sus jacales a merced de los ladrones y, desterradas en la ciudad de Oaxaca, trabajan en casas ajenas, venden bolsas para el mandado tejidas en hilos de plástico por los presos en la entidad, se organizan en comisiones para botear en las calles y las escuelas, o para pedir apoyo en víveres, ropa y medicamento.

La ciudad de Oaxaca se encuentra a siete horas de la ca-

becera municipal de Loxicha, a donde los pobladores tienen que viajar hasta doce horas desde sus comunidades. Cuando uno de sus familiares desaparece, las mujeres xiches hacen este doble viaje para llegar al plantón y acudir entonces, junto con sus paisanas, a donde pueda estar el pariente que buscan o les puedan informar sobre su paradero. Así han encontrado algunas al esposo, al padre, al hijo o al hermano arbitrariamente detenido, y en ocasiones también ellas han sido detenidas momentáneamente con la misma arbitrariedad.

Los presos loxichas en general "están acusados de pertenecer al EPR, pero los detienen por exigir agua, luz, escuela para los niños y más desarrollo en las comunidades", considera María Estela García Ramírez, una de las pocas mujeres en lucha que hablan español y de las más activas desde que su marido fue brutalmente asesinado a los 26 años en su comunidad el 24 de abril de 1997 por la policía y pistoleros del lugar.

"Los chamacos de trece y catorce años en adelante ya no pueden vivir en su casa y andan también escondidos en el monte, porque no más bajan y los detienen, los andan tortu-

rando", señala María Estela. "A los que tienen un expediente y llegan a detener les hacen otro y otro expediente; por eso hay presos que tienen hasta tres expedientes, en donde los acusan por muertes de hace 10 o 15 años y varios delitos, hasta doce delitos. Hay mucha gente perseguida porque si detienen a alguien quién sabe cuántos nombres le sacan y hacen que firme documentos en blanco nombrando a otros campesinos; entonces también a otros campesinos les hacen órdenes de aprehensión y así van aumentando las órdenes; ya no sabemos ni qué hacer y pues la población tiene miedo".

El 12 de febrero pasado, a una mujer llamada Regina, "sólo por decir que Lucio Vázquez es una persona mala, que no debe ser presidente municipal, la mataron y ahora está amenazado el hijo, que no puede hacer nada; no más enterraron a la señora que murió como si hubiera sido un animal, y así está; los familiares de las personas asesinadas nada más llegan al plantón y se hace una conferencia de prensa, pero que vayan a la procuraduría o donde pertenecen a exigir que se haga un acta de defunción, no, porque ahí no más los entierran rápido y ya", dice María Estela.

De los 40 asesinatos, "sólo algunos están documentados, porque los familiares no hablan español y tienen miedo, están en la región amenazados y reciben represalias, los hostigan y hasta los matan; no pueden hablar de lo que está pasando ahí, y nosotras como familiares no podemos regresar a la comunidad, en donde quisiéramos estar para seguir trabajando, sembrando maíz, frijol, café; todas las familias andan desplazadas, de aquí para allá".

A los presos en Almoloya de Juárez, informa la entrevistada, "una semana les dan de comer pan y otra semana tortilla nada más, y por cortar unas mangueras les pagan un peso al día. Han ido las esposas de algunos señores y dicen que los vieron muy mal, que ya están muy flacos y pálidos. Nada más las esposas y algún abogado pueden pasar a verlos, porque ni periodistas ni defensores de los derechos humanos pueden entrar; ni siquiera la CNDH; tampoco dejan pasar a los niños, que quién sabe hasta cuándo podrán ver a sus padres". Las esposas tenían más de un año de no verlos, "porque ponen muchos requisitos" que difícilmente pueden cumplir por ser monolingües en zapoteco, "además de que no tenemos dinero para estar yendo a Almoloya y luego otra vez a Oaxaca".

En el plantón, las mujeres "se turnan cada 15 días unas 15, 20 o 30 por otras 15, 20 o 30, según la situación del dinero para el traslado a Oaxaca", pero después de tres años de estar ahí diario, día y noche, "como que la gente ya se cansó de apoyarnos", advierte María Estela, y por parte del gobierno del estado, además del constante hostigamiento policiaco, no ha habido ninguna respuesta.

Rotmi Enciso



“Es difícil porque a veces sólo comen los niños”, comenta por su parte Donaciana Antonio Alvarado, una mujer que, menudita como es, coordina desde sus orígenes el “campamento de denuncia” y hace las veces de traductora. Su hermano estuvo preso tres años y ella sigue al frente de sus compañeras en el plantón porque “lo vamos a mantener en pie mientras haya gente nuestra todavía en la cárcel”, dice.

A mediados de marzo de este año, se instalaron también en plantón frente a la Cámara de Senadores, en la ciudad de México, donde estuvieron un mes y medio. Acudieron a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado y la Cámara de Diputados, pero después de romper magramente el cerco informativo en torno suyo y ser objeto de una gran solidaridad por parte de la sociedad civil, del gobierno federal tampoco obtuvieron respuesta.

“Tratamos de hablar con Dióodoro Carrasco”, señala María Estela, “porque en su sexenio como gobernador fue cuando más gente detuvieron y asesinaron, pero nunca nos recibió. En Gobernación nos dijeron que ni siquiera sabían del problema porque es local, que tenemos que resolverlo con el gobierno del estado, cuando que en Oaxaca nos han dicho que el problema es federal. Así se la pasan y nosotras sentimos que es una burla y que así como han salido algunos de la cárcel, si el gobierno tuviera voluntad, dejaría libres a todos los demás presos, porque son inocentes, pero no más nos traen de allá para acá y no dan respuesta a lo que estamos exigiendo, que cumplan las leyes

que ellos mismos imponen. Además, si hay presos en Almoloya y está metido el ejército federal en la región, el problema de Loxicha no sólo es local, sino también federal. Eso pensamos”.

Riquilda Hernández Martínez tenía 20 años de edad cuando su padre fue asesinado frente a ella por la policía y varios pistoleros del lugar el 9 de mayo de 1997. Desde entonces, además de participar en el plantón, forma parte de la comisión de traductoras que acude a todos los foros posibles del país a denunciar la represión en contra de los pueblos xiches. No obstante su juventud, Riquilda sabe que los caciques, “siempre que los nombraban como autoridades, nada más se apropiaban del dinero que llegaba, se volvían más ricos todavía y la gente pobre pues cada vez más pobre, no tenía qué comer ni ropa para vestirse, por eso el pueblo los dejó de nombrar, y ahora que apareció el grupo armado, ellos dicen que todos los campesinos somos malos para

estar en el municipio, pero nosotros luchamos por vivir mejor, por tener escuela, carretera, agua, luz eléctrica; existe por ejemplo una clínica para toda la población y somos 35 mil habitantes; por eso mucha gente se queda sin atención médica, y aparte de que nos tienen en la miseria y no resuelven nuestros problemas, el gobierno y los caciques nos detienen y nos matan sin razón alguna”.

Nestora y

Bertha Ramírez son primas; eran estudiantes de preparatoria a los 17 y 16 años de edad, respectivamente, cuando en 1997 sus padres fueron detenidos y torturados. Desde entonces, como Riquilda y María Estela, entre otras, aunque sus padres fueron puestos en libertad “por falta de pruebas”, van de un lugar a otro del país a denunciar su situación y participar en acciones convergentes con sus propias iniciativas.

Organizadas como Comité de Familiares de los Presos Políticos de la Región Loxicha, que a su vez forma parte de la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha, las esposas, madres y hermanas de los presos políticos, además de dirigirse a las autoridades para exigir justicia y respeto a sus derechos, han sumado esta lucha a las de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales para integrar un frente común contra la represión en cualquier parte del país y del mundo. *fm*



Rotmi Enciso